

AJZGAD...  
DE DISTRITO  
con 14 copias  
17 SEP -5 14:48

ZACATECAS, ZAC.

Amos-228  
CUADERNO PRINCIPAL  
AMPARO NUM. 140/2017  
QUEJOSAS: EXPLORADORA DE  
SOMBRERETE, S.A. DE C.V. Y  
COAGRAVIADAS.

RECURSO DE REVISIÓN 12045

**C. JUEZA PRIMERA DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS.**

**SERGIO RODRÍGUEZ MOLLEDA Y EDUARDO OCAMPO**

**BAUTISTA**, apoderados de las sociedades quejasas promoventes de la demanda de amparo, según lo tenemos reconocido en autos del juicio de amparo al rubro indicado, con el domicilio señalado para oír notificaciones, y autorizando en los más amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor a los señores licenciados Fabián María Aguinaco Bravo (cédula profesional núm. 643288), Andrés Aguinaco Gómez Mont (cédula profesional Núm. 8006479), Gabriela Ortiz Mestre (cédula profesional Núm. 8804873), y Rolando González Hernández (cédula profesional número 625723), indistintamente, así como a los pasantes en derecho Rossie Penhos Michan, Lillian Andrea Rabasa Véjar y Juan Carlos León Villarreal, con facultades para solicitar copias certificadas, recoger toda clase de documentos relacionados con el presente amparo, o bien, el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir los acuerdos o resoluciones dictadas por los tribunales<sup>1</sup>, respetuosamente comparezco y expongo:

Con el carácter de apoderados de las sociedades quejasas que tenemos reconocido en autos venimos a interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional del juicio de amparo donde se actúa, toda vez que las quejasas no están conformes con parte de la misma. Fundamos la interposición del recurso en las disposiciones de los artículos 81, fracción I, inciso e), 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, a cuyo efecto relatamos los siguientes antecedentes y expresamos agravios.

**OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN  
DEL RECURSO DE REVISIÓN.**

<sup>1</sup> Tesis número I.3o.C.725 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, bajo el rubro: **REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.**

Para los efectos del cómputo de los 10 días hábiles a los que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, conviene tener presente que la resolución del 15 de agosto de 2017 se notificó por lista del lunes 21 del mismo mes y año, de suerte que el primer día hábil para los efectos del término establecido por la Ley de Amparo, fue el miércoles 23 de agosto, para fenecer el martes 5 de septiembre del 2017, descontando los días 26 y 27 de agosto, 2 y 3 de septiembre, por ser inhábiles, de conformidad con las disposiciones del artículo 19 de la Ley de Amparo.

#### **ANTECEDENTES:**

1.- Con fecha 9 de febrero de 2017, las sociedades quejasas: **EXPLORADORA DE SOMBRERETE, S.A. de C.V., COMPAÑÍA MINERA SABINAS, S.A. de C.V., DESARROLLOS MINEROS MADERO, S.A. DE C.V., MINERA MADERO, S.A. de C.V., DESARROLLOS MINEROS EL ÁGUILA, S.A. de C.V., MINERA FRESNILLO, S.A. de C.V., METALÚRGICA REYNA, S.A. de C.V., MINERA SAUCITO, S.A. de C.V., y MINERA JUANICPIO, S.A. DE C.V.,** por conducto de sus apoderados jurídicos, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos que seguidamente se describen:

#### **AUTORIDADES RESPONSABLES:**

1. Congreso de la Unión, integrado por:
  - a) Cámara de Senadores, y
  - b) Cámara de Diputados.
2. Presidente de la República Mexicana;
3. Legislatura del Estado de Zacatecas;
4. Gobernador del Estado de Zacatecas;
5. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas;
6. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas;
7. Subsecretario de Finanzas del Estado de Zacatecas;
8. Dirección de Ingresos perteneciente a la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas;
9. Dirección de Fiscalización perteneciente a la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas;
10. Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas.

#### **ACTOS RECLAMADOS:**



OFICIO DEL VICESINISTRO  
CIRCUITO  
ZACATECAS.

1. Del Congreso de la Unión reclamamos la expedición de la Ley General de Cambio Climático, del 19 de abril de 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 6 de junio de 2012, en cuanto a sus artículos 8, fracción II, y 30, fracción III; con todas sus consecuencias y efectos.

2. Del Presidente de la República reclamamos el decreto que promulga y manda publicar la Ley General de Cambio Climático, de 4 de junio de 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil doce; con todas sus consecuencias y efectos.

3. De la Legislatura del Estado de Zacatecas reclamamos la invasión de la esfera de competencia reservada a los Poderes Federales por el artículo 73 fracciones X y XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Minera, con motivo de la expedición de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que entró en vigor el dos de enero de 2017, para establecer y cobrar impuestos de carácter ecológico a la industria minera; con todas sus consecuencias y efectos.

3.1. De la Legislatura del Estado de Zacatecas reclamamos la expedición de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que entró en vigor el dos de enero de 2017, al ser el primer día hábil, en lo que concierne a los artículos comprendidos en el Título Segundo, de los impuestos, Capítulo Primero, Impuestos Ecológicos, Sección II, Sección III, Sección IV y Sección V; con todas sus consecuencias y efectos.

3.2. De la Legislatura del Estado de Zacatecas, también reclamamos la violación del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por omisión en la aplicación de los principios rectores que sobre los bienes de dominio público de la federación determina la Ley General de Bienes Nacionales en la impugnada Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; con todas sus consecuencias y efectos.

3.3. De la Legislatura del Estado de Zacatecas, reclamamos la aplicación expresa de los numerales 8, fracción II, y 30, fracción III de la Ley General de Cambio Climático, de 4 de junio de 2012, en la formulación y expedición de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas;

4. Del Gobernador del Estado de Zacatecas reclamamos el decreto que manda publicar la referida Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; con todas sus consecuencias y efectos.

4.1. Del Gobernador del Estado de Zacatecas, también reclamamos, como encargado del Poder Ejecutivo del Estado y responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes de esa entidad federativa, los actos inminentes de aplicación y ejecución de la Ley de Hacienda; todos los acuerdos, las órdenes, instrucciones o indicaciones, verbales o escritas, que como ejecutivo del Estado cursó



ESTADO DEL VIGÉSIMO  
ER CIRCUITO  
IS. ZACATECAS.

a sus subalternos o inferiores jerárquicos para ejecutar la Ley impugnada; también le reclamamos la anuencia, expresa o implícita, y el respaldo tácito, al igual que la tolerancia, para que el Secretario de Finanzas del Estado propicie, permita, autorice o consienta la ejecución de la referida Ley de Hacienda, a pesar de que con ello se causarían daños irreparables a las quejas; con todas sus consecuencias y efectos.

**4.2.** Del Gobernador del Estado de Zacatecas reclamamos la violación al artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de hacer cumplir las leyes federales de Minería, la Ley General de Bienes Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; con todas sus consecuencias y efectos.

**4.3.** Del Gobernador del Estado de Zacatecas reclamamos la expedición y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas de fecha 31 de diciembre de 2016 del Decreto "Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales, y Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2017"; con todas sus consecuencias y efectos.

**5.** Del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas reclamamos el refrendo de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; con todas sus consecuencias y efectos.

**6.** Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, en su calidad de titular y responsable del trámite y resolución de los asuntos que incumben a esa Secretaría en los términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, y del Reglamento Interior de esa Secretaría de Finanzas, reclamamos el cumplimiento y ejecución de los actos atribuidos al Gobernador del Estado de Zacatecas, con todas sus consecuencias y efectos; y también le reclamamos la emisión de los mismos acuerdos, órdenes o resoluciones si los hubiere dictado de propio imperio y no en cumplimiento de actos de su superior jerárquico, con todas sus consecuencias y efectos; reclamamos, igualmente, las órdenes, instrucciones o acuerdos, verbales o escritos, que ha girado o está por expedir para ejecutar y llevar hasta sus últimas consecuencias la Ley impugnada; todos los efectos, consecuencias, cumplimiento y ejecución de estos actos, ya sea que los lleve a cabo por sí mismo o por conducto de sus subordinados o por medio de cualquier otra autoridad del Estado de Zacatecas; con todas sus consecuencias y efectos.

**7.** Del Subsecretario de Ingresos, Director de Ingresos y Director de Fiscalización, todos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, en los términos del Reglamento Interior de esa Secretaría de Finanzas, reclamamos el cumplimiento y ejecución de los actos atribuidos al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, con todas sus consecuencias y efectos; y también les reclamamos la emisión de los mismos acuerdos, órdenes o resoluciones si los hubieren dictado



DO DEL VICÉMINISTRO  
CIRCUITO  
ACATECAS.

de propio imperio y no en cumplimiento de actos de su superior jerárquico, con todas sus consecuencias y efectos; reclamamos, igualmente, las órdenes, instrucciones o acuerdos, verbales o escritas, determinaciones o resoluciones, que han girado o están por expedir para ejecutar y llevar hasta sus últimas consecuencias el decreto impugnado; todos los efectos, consecuencias, cumplimiento y ejecución de estos actos, ya sea que los lleven a cabo por sí mismos o por conducto de sus subordinados o por medio de las autoridades del Estado de Zacatecas; con todas sus consecuencias y efectos.

8. Del Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas reclamamos la publicación del decreto del Ejecutivo del Estado que ordena publicar la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como la publicación del Decreto "Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales, y Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2017"; con todas sus consecuencias y efectos.

9. De todas las autoridades antes mencionadas reclamamos todas las consecuencias y efectos inmediatos de la Ley de Hacienda impugnada.

Respecto de todos los efectos y consecuencias de los actos reclamados, manifestamos a su Señoría que nos es imposible saber cuáles son, pues todo depende de las actuaciones de las autoridades responsables.

**DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS:** Los que reconocen los artículos 1º, 3º, 5º, 13, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 31, fracción IV, 40, 41, 49, 50, 73, fracciones VII, X, XXIX y XXIX-G, 116, 120 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La demanda de amparo, por cuestiones de turno se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, bajo el número de expediente 140/2017.

3. En proveído del quince de febrero de dos mil diecisiete se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a las autoridades responsables el respectivo informe con justificación, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

4. El veintinueve de mayo de dos mil diecisiete se celebró la audiencia constitucional, con la asistencia personal de los letrados autorizados en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes ofrecieron pruebas y formularon alegatos.

JO DEL VICEPRESIDENTE  
RCUITO  
ZACATECAS.

5. Con tal motivo, la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas pronunció sentencia el quince de agosto de dos mil diecisiete, que en sus puntos resolutive determina lo siguiente:

**PRIMERO.** Se sobresee en relación con el artículo 8, fracción II, de la Ley General de Cambio Climático y Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero, sexto y séptimo de esta sentencia

**SEGUNDO.** La Justicia de la Unión no amparo ni protege a EXPLORADORA DE SOMBRERETE, S.A. de C.V., COMPAÑÍA MINERA SABINAS, S.A. de C.V., DESARROLLOS MINEROS MADERO, S.A. DE C.V., MINERA MADERO, S.A. de C.V., DESARROLLOS MINEROS EL ÁGUILA, S.A. de C.V., MINERA FRESNILLO, S.A. de C.V., METALÚRGICA REYNA, S.A. de C.V., MINERA SAUCITO, S.A. de C.V., y MINERA JUANICIPIO, S.A. DE C.V., contra actos que reclamaron de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente de la República; consistente en el artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando décimo de la presente resolución.

**TERCERO.** La Justicia de la Unión amparo y protege a EXPLORADORA DE SOMBRERETE, S.A. de C.V., COMPAÑÍA MINERA SABINAS, S.A. de C.V., DESARROLLOS MINEROS MADERO, S.A. DE C.V., MINERA MADERO, S.A. de C.V., DESARROLLOS MINEROS EL ÁGUILA, S.A. de C.V., MINERA FRESNILLO, S.A. de C.V., METALÚRGICA REYNA, S.A. de C.V., MINERA SAUCITO, S.A. de C.V., y MINERA JUANICIPIO, S.A. DE C.V., contra los actos que reclamaron del Congreso y del Gobernador del estado de Zacatecas; consistentes en los artículos 8 a 34 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de dos mil dieciséis, que prevén, respectivamente, los impuestos ecológicos a la extracción de materiales, a la emisión de gases a la atmósfera, a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua y al depósito de contaminantes. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando undécimo de esta sentencia.

**Notifiquese personalmente.**

6. Por no estar de acuerdo en parte con el resolutive segundo de la resolución, venimos a interponer el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo.

#### **AGRAVIOS:**

**ÚNICO.** El presente agravio combate el considerando DÉCIMO de la sentencia de amparo que resuelve como infundados los argumentos de



ESTADO DEL VOLCANO  
ER CIRCUITO  
IS. ZACATECAS.

inconstitucionalidad del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático.

El agravio combate, en primera instancia, la metodología utilizada en el considerando DÉCIMO para analizar la constitucionalidad del artículo combatido, a partir de la cual se concluye que la Ley General de Cambio Climático, en su artículo 30, es constitucional. Tal considerando es del tenor siguiente:

**"DÉCIMO. Estudio de fondo, artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático.** El concepto de violación vertido contra el precepto citado resulta infundado, como se argumentará a continuación.

"En el decimonoveno motivo de inconformidad (foja 320), las quejas argumentan, en esencia, que el numeral 30, fracción III; de la Ley General de Cambio Climático es violatorio de los principios de legalidad y certeza tributaria, porque su contenido no permite determinar los elementos de los beneficios tributarios regulados; en concreto, una porción de la disposición entrega al Ejecutivo proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos, lo que, a su juicio, hace inviable que puedan concretarse los elementos de los tributos.

"Que además, la norma en comento transfiere indebidamente facultades legislativas a la administración pública que estuviera regulada constitucionalmente tal posibilidad.

"El concepto de violación anterior resulta infundado, debido a que la disposición reclamada contempla una facultad general que, en abstracto, no puede resultar violatoria del principio de legalidad tributaria, al depender tal circunstancia de su configuración concreta.

"En efecto, se reitera, el artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático dispone:

*"Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:*

*"[...]*

*"III. Proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos, para desinstalarlos a la protección y reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables ante los efectos del cambio climático..."*

"Del precepto transcrito se deduce que se otorgó la facultad a las dependencias y entidades de la administración pública en general para proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de



DELEGADO DEL VICÉSIMO  
PRIMER CIRCUITO  
CAS. ZACATECAS.

235

recursos para la protección y reubicación de asentamientos humanos por los efectos del cambio climático.

"De lo anterior destaca que la atribución citada se concreta en la posibilidad de proponer e impulsar ese tipo de medidas, por lo que no puede considerarse que se trate de una facultad legislativa o de configuración unilateral para las autoridades en comento, dado que no establece que por sí mismas puedan establecer aquéllos.

"Es decir, se advierte que lo regulado únicamente implica una facultad de promoción de mecanismos para la finalidad, pero no conlleva necesariamente la posibilidad de que se establezcan reglamentariamente.

"De tal manera que, por una parte, no se trata de facultad legislativa alguna y, por otra, no se permite que se establezcan directamente tributos sobre la materia.

"Por tanto, no puede considerarse que el legislador federal haya delegado las facultades tributarias con las que cuenta ni que en uso de la atribución en comento puedan determinarse impuestos fuera de una ley.

"Asimismo, es evidente que los mecanismos de que se trata se encuentran supeditados a la configuración particular con la que se concreten, por lo que la legalidad de éstos depende de la forma en que se establezcan y, por ende, resulta irrelevante que, en abstracto, no se puedan determinar los elementos de aquéllos.

"En consecuencia, al no tratarse de una facultad legislativa ni permitirse directamente la imposición de tributos o mecanismo de esta naturaleza, el precepto reclamado no resulta contrario al principio de legalidad tributaria.

"En suma, el contenido del dispositivo reclamado no resulta inconstitucional en sí mismo, pues únicamente regula una facultad general, por lo que, en todo caso, se insiste, la constitucionalidad de las medidas contempladas depende de su configuración concreta.

"En conclusión, al resultar infundado el concepto de violación y no estar en algún supuesto en el que proceda suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se **niega** el amparo solicitado respecto del artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo."

Primero se expondrán las razones por las que el Juzgado debió de haber analizado la norma efectivamente aplicada a la quejosa y no así el artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático en su mejor luz. Después se exponen las razones por las que la norma aplicada por la Legislatura de Zacatecas, pretendidamente derivada del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático, es inconstitucional.



JUZGADO DEL VICESIMO  
R CIRCUITO  
S. ZACATECAS.



## I. Metodología de Análisis de los Numerales Tildados de Inconstitucionales

La exposición de motivos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como los diversos informes justificados de las autoridades responsables del Estado de Zacatecas, invocan el artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático como la génesis de una facultad para crear toda suerte de contribuciones en materia ecológica. Corrobora esto el considerando OCTAVO de la sentencia.

El artículo 30 de la Ley General de Cambio Climático aplicada en detrimento de las quejas es medularmente del tenor siguiente:

**“Artículo 30.** Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:

“(…)

**“III.** Proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos, para destinarlos a la protección y reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables ante los efectos del cambio climático;”

(Énfasis añadido)

Como se desprende del Considerando OCTAVO de la sentencia de amparo, el numeral 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático fue aplicado a las quejas, pues constituye el fundamento normativo para la exposición de motivos de la Ley de Hacienda de Zacatecas. En la exposición de motivos se considera al artículo 30, fracción III, como una norma habilitante para la expedición de la Ley de Hacienda de Zacatecas y, específicamente, para los cuatro impuestos ecológicos. Esto es, no cabe duda de la aplicación del artículo en detrimento de las quejas.

No obstante, pese a que en el considerado OCTAVO de la sentencia se dispone que el numeral 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático es aplicado en detrimento de la queja, el considerando DÉCIMO considera infundados los conceptos de violación que lo controvierten. Dispone que el artículo 30 multicitado constituye una facultad general para impulsar mecanismos de recaudación, pero no una facultad para expedir legislación concreta. Esto es, la Juez de Distrito lleva a cabo una interpretación del artículo compatible con el texto Constitucional y con la normatividad general en materia de medio ambiente.

ESTADO DEL VOLCAN  
I CIRCUITO  
I. ZACATECAS.

Si bien las quejas están de acuerdo con la conclusión última, sobre que la Legislatura de Zacatecas no se encuentra facultada para expedir los impuestos ecológicos, difieren en cuanto a la constitucionalidad del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático.

Efectivamente, existen diversas normas válidas derivadas del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático que no facultan a la Legislatura del Estado de Zacatecas. En cambio, hay al menos una norma inconstitucional que también podía derivarse del artículo 30, fracción III, de la misma Ley, que fue aplicada en detrimento de las quejas y cuya inconstitucionalidad es palmaria. La sentencia de amparo debió de haber analizado la constitucionalidad de la interpretación efectivamente empleada por la Legislatura de Zacatecas, no aquella a partir de la cual el numeral pudiera resultar válido o constitucional.

Para el presente agravio es importante distinguir entre enunciados normativos y normas. Pues si bien el artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático admite diversas interpretaciones válidas, también del mismo numeral se desprenden diversas interpretaciones incompatibles con la constitución y el régimen general en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.



PROF. LEGADO DEL VICERRECTOR  
JER CIRCUITO  
CAS. ZACATECAS.

Al respecto, Riccardo Guastini afirma lo siguiente: "es necesario distinguir cuidadosamente entre los enunciados normativos -las <<disposiciones>>, como se suele decir- y las normas, entendidas como significados: entre las dos cosas, de hecho, no se da una correspondencia bi-unívoca." Guastini, Riccardo, Teoría e Ideología de la Interpretación Constitucional, ed. Minima Trotta, Madrid, 2008, p. 32.

La diferencia entre disposición y norma es una distinción generalmente aceptada en la teoría del derecho. Hacen esta distinción, entre otros, los siguientes autores: Tullio Ascarelli, Luigi Montesano, Vezio Crisafulli, Giovanni Tarello y Riccardo Guastini. Ver Chiassoni, Pierluigi. Chiassoni, Pierluigi, Disposición y norma: una distinción revolucionaria, Disposición vs. Norma, ed. Postpositivismo y Derecho, Perú, 2011, p. 7.

Esto es, de un mismo enunciado normativo se pueden desprender diversas normas. La norma es el producto de la interpretación de los enunciados normativos. El argumento de la sentencia de amparo es que toda vez que la interpretación o norma adecuada y con mayor validez del artículo 30 no autoriza o faculta a la creación de los impuestos ecológicos, entonces el artículo no es inconstitucional ni afecta a la quejosa. Pero de que

el artículo 30, fracción III, tenga interpretaciones constitucionalmente válidas no se sigue que la norma particular derivada del artículo 30, fracción III, adoptada y empleada por la legislatura del Estado de Zacatecas también sea constitucional.

Hay interpretaciones y normas válidas que se desprenden del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático. Pero la norma derivada del artículo, fracción III, cuya constitucionalidad se debía analizar no era aquella vista en su mejor luz, sino aquella que fue concretamente aplicada en perjuicio de la quejosa.

Aquí surge un problema metodológico importante. **¿Debe el Juzgador analizar la constitucionalidad de la norma impugnada en su mejor luz o la norma que de hecho fue aplicada?**

No cabe duda que para determinar si debe permanecer una ley en el sistema jurídico nacional debe analizarse si de los enunciados normativos se podrían derivar potencialmente normas compatibles, válidas, con el ordenamiento; si existe una interpretación o norma válida.



LEGADO DEL VICE  
PER CIRCUITO  
AS. ZACATECAS.

Simultáneamente, no se puede negar la utilidad de que los Juzgadores analicen si los enunciados normativos contienen normas o realidades posibles compatibles con el ordenamiento jurídico. Tiene una finalidad operativa para los demás jueces y actores jurídicos sobre la forma en que a futuro deben interpretar la norma. Buscar las interpretaciones válidas del enunciado normativo reduce incertidumbre jurídica. Si el Juzgador se limita a descartar como inconstitucional una de las normas que se desprenden de un enunciado normativo, pero no orienta la forma en que sí debe utilizarse a futuro, entonces puede tomar muchas instancias en el diálogo entre poderes para que las autoridades discernan el uso adecuado de una norma.

Pero en cambio, para analizar si se han violado los derechos de un particular se debe analizar la norma conforme fue aplicada. Viola el principio de estricto derecho la búsqueda de interpretaciones y normas alternativas que sean válidas y compatibles con el ordenamiento jurídico y con la constitución. El acto de autoridad se debe apreciar conforme fue aplicado.

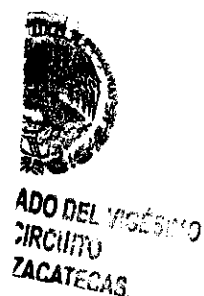
Es útil analizar *-obiter dicta-* si el Juzgador considera que hay interpretaciones válidas o normas válidas que se desprendan de los enunciados normativos. Tal análisis, si bien es irrelevante para la contienda judicial, es instrumental para la futura aplicación del numeral por

autoridades legislativas y ejecutivas. Esto es, el segundo análisis tiene una utilidad y público diverso al de la disputa contenciosa misma. Es para que operadores jurídicos sepan aplicar la norma a futuro.

Así las cosas, las quejas coinciden con la autoridad en que hay interpretaciones válidas y justificadas del numeral 30, fracción III, de la Ley General de Cambio climático. Pero tal análisis constituye uno marginal a la discusión normativa de la controversia.

Como conclusión, la sentencia de amparo emplea una metodología de análisis inadecuada. Analiza la constitucionalidad de una norma que no fue impugnada; analiza si la interpretación correcta del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático es inconstitucional: coincidimos la Juzgadora y los quejosos que no lo es. En cambio, lo que es inconstitucional es la norma que se desprende de tal numeral y que concretamente aplicó la legislatura en perjuicio de las quejas.

De las diversas normas que disyuntivamente se desprenden del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático, la quejosa impugnó la constitucionalidad de aquella aplicada en su detrimento a partir de la cual, según la Legislatura de Zacatecas, está facultada para crear impuestos ecológicos con independencia en la distribución constitucional de competencias. Es esa norma la que es inconstitucional y la que combatimos.



## **II. Inconstitucionalidad de la Norma Aplicada en detrimento de las quejas, pretendidamente derivada Artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático**

La Ley General de Cambio Climático, del 19 de abril de 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 6 de junio de 2012, en cuanto a su artículo 30, fracción III, que fueron aplicado de manera expresa en la formulación y expedición de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, es violatorio de los principios de legalidad y certeza en materia tributaria, consagrados en la Constitución Federal y, por consecuencia, de los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 14 y 16 del mismo ordenamiento.

No es inconstitucional el texto del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático, en todas sus interpretaciones posibles, sino que es inconstitucional la aplicación concreta del mismo realizada por la Legislatura del Estado de Zacatecas.

Conviene señalar que en la exposición de motivos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, las autoridades responsables citan en apoyo de sus facultades legislativas el artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático.

Ahora bien, el principio de legalidad tributaria se encuentra consagrado en el artículo 73, fracciones VII y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina una reserva para establecer contribuciones fiscales en virtud del carácter democrático del régimen constitucional y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Bajo este principio, solo los organismos de representación popular podrán imponer tributos.

El citado artículo 73, fracciones VII y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye al Congreso General facultades para imponer impuestos, en los siguientes términos.

**“Artículo 73.** El Congreso tiene facultad:

“(…)

**“VII.** Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.

“(…)

**“XXIX.** Para establecer contribuciones.”

Conforme al concepto decimonoveno de la demanda, se puede apreciar una violación a diversas garantías y normas constitucionales:

#### **a. Norma Aplicada y Legalidad Tributaria**

Ahora bien, el principio de legalidad tiene como objetivo primordial fortalecer la seguridad jurídica y evitar los abusos impositivos de los gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer previamente, y con base en una discusión democrática, sus elementos esenciales para ser válido. En este sentido, el principio de legalidad, como requisito para la creación de un tributo, tiene las siguientes características: (i) Es expresión del principio de representación popular y del principio democrático, derivado de los postulados del Estado constitucional liberal. (ii) Materializa el principio de predeterminación del tributo, “según el cual una *lex previa y certa* debe señalar los elementos de la obligación fiscal”. (iii) Brinda seguridad a las personas frente a sus obligaciones fiscales, con lo cual “se otorga una debida protección a la garantía fundamental del debido proceso”. (iv) Responde a la necesidad de promover una política fiscal



ESTADO DEL PUEBLO  
1. CIRCUITO  
1. ZACATECAS.

coherente e inspirada en el principio de "unidad económica", especialmente cuando existen competencias concurrentes donde confluye la voluntad del Congreso de la Unión, de las Legislaturas de los Estados y de los municipios. (v) No se predica únicamente de los impuestos, sino que es exigible también frente a cualquier tributo o contribución (en sentido amplio). Así, frente a tributos de carácter federal, el Congreso está obligado a definir todos los elementos en forma "clara e inequívoca", esto es, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto, la base gravable, la tasa o tarifa y época de pago.

De conformidad con el mandato constitucional, el legislador federal está facultado para fijar los elementos constitutivos del tributo dentro de los límites debidamente señalados en ellas, para fijar las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes; empero, el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados, obligatoriamente, por la ley, como así se deduce del texto de la Constitución.

Interpretando el sentido y alcance del precepto constitucional, llegaríamos a la conclusión que del principio de legalidad se derivan las siguientes reglas: "(i) Son los órganos de elección popular quienes directamente deben señalar los sujetos activo y pasivo, el hecho y la base gravable y la tarifa de las obligaciones tributarias, pues esta exigencia emana de lo prescrito por la propia Constitución el artículo 73 fracciones VII y XXIX; (ii) al establecer los elementos del tributo, es menester que la ley, determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada uno de los elementos esenciales del mismo; (iii) sólo cuando la falta de claridad sea insuperable, se origina la inconstitucionalidad de la norma que determina los elementos de la obligación tributaria.

Así las cosas, las normas impugnadas incumplen con los principios constitucionales de legalidad y certeza tributaria. En primer lugar, es necesario reconocer que la literalidad del artículo impide que haya una determinación elemental de los componentes del beneficio tributario. De hecho, una porción del artículo entrega al Ejecutivo a través de las dependencia y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, la facultad para proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos –llámense impuestos–, para destinarlos a la protección y reubicación de los asentamientos urbanos más vulnerables ante los efectos del cambio climático, lo que vulnera claramente las competencias indelegables del Congreso de la Unión, o bien, de las Legislaturas Estatales, en materia tributaria. La aplicación de una norma de esta naturaleza podría terminar por afectar gravemente el orden jurídico, ya que en cumplimiento de cualquiera de esas finalidades, el Ejecutivo podría



IDO DEL VICEROY  
IRCUITO  
ACATECAS.

desmontar buena parte de la política fiscal establecida bajo los parámetros del proyecto de nación contemplado en los artículos 25 y 26 constitucionales. Además, aunque su finalidad sea loable, lo cierto es que el numeral impugnado no concreta los elementos mínimos del tributo. Esas carencias hacen inviable el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del ejecutivo y conlleva la inconstitucionalidad de la misma norma.

Ahora bien, de conformidad con los numerales 40, 41 y 49 de la Constitución Federal, las facultades de la Federación son expresas, es decir, clara y precisamente definidas por el Constitución Federal, de suerte que no pueden ampliarse, ni transferirse de uno a otro poder, ni deducirse otras de las concedidas, ni aumentarse por simple analogía o mayoría de razón. La ampliación de la facultad así ejercida significaría en realidad la creación de una nueva facultad, donde un órgano constituido, con facultades expresas y limitadas, sustituiría indebidamente al órgano reformador de la Constitución (artículo 135), que es el único que puede investir de facultades a los Poderes Federales de que hablan los artículos de la Constitución Federal.

De suerte que, desbordando el ejercicio de dichas facultades expresas, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Cambio Climático de 19 de abril de 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 6 de junio del mismo año, que en su artículo 30, fracción III, confiere facultades legislativas a las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, para proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos.

El artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático dispone:

**“Artículo 30.** Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:

“(…)

“III. Proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos, para destinarlos a la protección y reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables ante los efectos del cambio climático;”

Es preciso señalar que el artículo 30, fracción III, de la Ley es citado en la exposición de motivos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas como sustento para la formulación de los diversos impuestos



GO DEL VICEROY  
RCUITO  
ACATECAS

impugnados. Pero tal interpretación carece de un sólido sustento normativo, según se demuestra del contenido de los conceptos de violación de la demanda de amparo.

Tal artículo fue aludido en la exposición de motivos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas como sustento para la imposición de los diversos impuestos ambientales. Si tal artículo en efecto es un sustento para impuestos ambientales, entonces el artículo es inconstitucional. Es inconstitucional, entre otras razones, por contravenir el alcance de los artículos 27, párrafos cuarto y quinto, así como 73, fracciones XXIX numeral 2º y XXIX-G, todos del texto constitucional.

**b. Distribución constitucional de competencias en uso y aprovechamiento de minerales**

La demanda debe ser interpretada como un todo. La jurisprudencia XX.1o. J/44 de la Novena Época de rubro "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO"<sup>2</sup> dispone la obligación de analizar las demandas de amparo en su conjunto.

Así las cosas, los argumentos sobre constitucionalidad de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas se deben hacer extensivos a la norma que la Legislatura de Zacatecas pretendidamente desprende del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático. Solicitamos que los argumentos de los conceptos de violación tercero y séptimo sobre las facultades constitucionales para regular y gravar el uso y aprovechamiento de minerales, así como de la industria minera se tengan por aquí reproducidos íntegramente, impugnando la norma que en este concepto se reclama.

Medularmente, es inconstitucional la norma que se desprende de la Ley General de Cambio Climático que invade las competencias en materia de uso y aprovechamientos de los bienes de dominio directo de la Nación, en contravención de los artículos 73, fracciones X y XXIX, inciso 2º, así como del artículo 27, párrafos 4º y 5º del texto constitucional, en relación con los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 6º de la Ley Minera.

**c. Violación al Régimen Constitucional y General de Competencias e Instrumentos en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico**

<sup>2</sup> Jurisprudencia XX.1o. J/44 de la Novena Época, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, agosto de 1997, página 519.



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO  
DEL VIGÉSIMO CIRCUITO  
S. ZACATECAS.



Los argumentos sobre constitucionalidad de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas a la luz del sistema general de distribución de competencias en materia ambiental y equilibrio ecológico son aplicables a la norma que la Legislatura de Zacatecas pretendidamente desprende del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático.<sup>3</sup>

Primero, como se expone en el cuarto concepto de violación (y solicitamos que se tenga por aquí reproducido), la norma reclamada contraviene los artículos 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conjunción con los artículos 5°, 7°, 8°, 21, 22, 22bis, 28 y 111 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Tales numerales formulan una distribución puntual y específica de competencias entre la Federación, Estados y Municipios para cumplir con los propósitos de la mencionada ley, incluyendo la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. La norma impugnada transgrede el régimen específico de facultades en materia de externalidades a las aguas, atmósfera, así como específicamente las propias de la industria minera.

Segundo, como se expuso en el quinto concepto de violación (y solicitamos que se tenga por aquí reproducido), la norma reclamada contraviene los artículos 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conjunción con los artículos 7°, 9° y 17 de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Tales numerales formulan una distribución puntual y específica de competencias para la Federación, Estados y Municipios en materia de protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional. La norma impugnada, que pretendidamente se desprende de la Ley General de Cambio Climático, invade la distribución específica de competencias para la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para prevenir la contaminación de sitios con esos residuos y llevar a cabo su remediación, propios de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Tercero, como se desprende del sexto concepto de violación y solicitamos que se tenga por aquí incorporado, la norma impugnada transgrede los artículos 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de

<sup>3</sup> La jurisprudencia XX.1o. J/44 de la Novena Época de rubro "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO" dispone la obligación de analizar las demandas de amparo en su conjunto. Jurisprudencia XX.1o. J/44 de la Novena Época, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, agosto de 1997, página 519.



DO DEL VIGÉSIMO  
CIRCUITO  
ACATEPEC

los Estados Unidos Mexicanos, en conjunción con los artículos 5° y 7° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por legislar un tema ambiental de impacto en varias Entidades Federativas, y por consecuencia, de competencia Federal. La invocada Ley establece criterios de desempate cuando un fenómeno ecológico trasciende las delimitaciones territoriales físicas de una entidad federativa. La facultad impugnada contraviene las cláusulas de desempate competenciales para emisiones a la atmósfera, así como para descargas de agua, que trascienden la demarcación territorial del Estado de Zacatecas y, como consecuencia, competen a la Federación.

Cuarto, la norma impugnada transgrede los artículos 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conjunción con los artículos 7°, 8° y 9° de la Ley General de Cambio Climático. Tales numerales formulan una distribución puntual y específica de competencias para la Federación, Estados y Municipios para el enfrentamiento a los efectos adversos del cambio climático. De los artículos 7° y 8° se puede apreciar que las facultades en esta materia son principalmente a favor de la Federación y, secundariamente, en su ejecución, para las Entidades Federativas. En los instrumentos de combate al cambio climático no se crean instrumentos económicos impositivos a favor de orden de gobierno alguno.

Una norma que faculta al Estado de Zacatecas para legislar omniscientemente en materia de protección al ambiente es una norma que vulnera y malinterpreta el minucioso balance de facultades en esa materia, así como de instrumentos normativos ecológicos, creados por el órgano reformador de la Constitución, así como por el Congreso de la Unión, a partir de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Cambio Climático.

Como corolario, se debe concluir que la norma impugnada contraviene el complejo entramado de normas de distribución de competencias reglamentarias del artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

**d. Violación al Sentido Literal y Sistemático del Artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático**

La norma aplicada por la Legislatura del Estado de Zacatecas, pretendidamente sustentada en el artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático, transgrede también el sentido literal, así como sistemático del propio artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático.

Una interpretación sistemática a rúbrica conduce a la conclusión que el artículo 30 no es una de distribución de facultades. Se debe poner atención a los títulos y capítulos de la Ley General de Cambio Climático.

Por un lado, el TÍTULO SEGUNDO establece la distribución de competencias (artículos 5° a 12), sin otorgar ninguna competencia a las Entidades en materia tributaria, para regular externalidades en el agua atmósfera o en la superficie, ni mucho menos sobre la disposición final de residuos. Por otro lado, el TÍTULO CUARTO, sobre la Política Nacional de Cambio Climático, establece en su Capítulo II, de adaptación (artículos 27 a 30), los instrumentos del artículo 30. El Título Cuarto se debe interpretar a la Luz del Título Segundo. Los instrumentos del artículo 30 se deben ejercer conforme a los artículos de distribución de competencias, que no facultan a la entidad Federativa en política impositiva.



ADO DEL VICEROY  
CIRCUITO  
ZACATECAS

En conclusión, la interpretación sistemática a rubrica de la Ley General de Cambio Climático, Títulos Segundo y Cuarto, conduce a la conclusión que el artículo 30 no confiere facultad alguna para imponer impuestos a materia o industria alguna dentro de su demarcación territorial. Esto es, no es un artículo que distribuya competencias.

Esto se refuerza por la interpretación literal del artículo 30, que expresamente dispone que el ejercicio de las herramientas del artículo 30 se debe llevar a cabo por cada orden de gobierno, *"en el ámbito de sus competencias"*. Esto es, atendiendo a los numerales 5° a 12 de la misma Ley y correspondientes de las demás leyes de la materia.

Finalmente, el artículo 30 crea la herramienta de proponer e impulsar recaudación ("proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos"), pero no de imponer mecanismos de recaudación novedosos, diversos a los que ya tenía facultado cada orden de gobierno. Esto es, se trata de una facultad colaborativa para que cada orden de gobierno intervenga ante quienes sí están facultados para expedir contribuciones y que tales contribuciones sean utilizadas para mitigar daños de cambio climático. Pero no es una facultad en sí misma.

En síntesis, la norma aplicada a las quejas (pretendidamente sustentada en el artículo 30, fracción III multicitada) es contraria a la interpretación gramatical y sistemática del propio artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático.

Efectivamente la norma invocada por la Legislatura de Zacatecas, supuestamente derivada del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático, es incompatible con el régimen constitucional de distribución de competencias, así como con el régimen general de distribución de competencias en materia de medio ambiente.

De lo anterior se sigue que, la norma concreta aplicada en detrimento de las quejas, que la Legislatura del Estado de Zacatecas desprende del artículo 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático, es inconstitucional. De todo lo dicho se impone la conclusión ineluctable de que la norma aplicada a los particulares contraviene el régimen constitucional y general de distribución de competencias, tanto en materia de bienes del dominio directo de la nación, como del uso y aprovechamiento de minerales, así como asociados con la materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.



COLEGIADO DE  
CIRCUITO  
AS

En mérito de lo expuesto y fundado, a usted, C. Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas atentamente pedimos, se sirva tener por interpuesto el presente recurso de revisión contra parte de la sentencia dictada en la audiencia constitucional; sirva mandar distribuir las copias del escrito de expresión de agravios que acompaño, y disponga que se remitan los autos originales al Tribunal revisor que corresponda.

Al Tribunal Colegiado a quien por turno corresponda conocer del recurso de revisión, atentamente pedimos, se sirva admitirlo, y en su oportunidad dicte ejecutoria en que revoque la negativa y conceda el amparo a las quejas en la parte de la sentencia que se impugna.

**PROTESTAMOS LO NECESARIO.**

**Ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas,**

**a 5 de septiembre de 2017.**

**SERGIO RODRÍGUEZ MOLLEDA Y EDUARDO OCAMPO/BAUTISTA**

Representantes Legales de las quejas.

En términos del artículo 3º párrafo séptimo, de la  
Ley de Amparo, se da fe que ( ) presente fue  
incorporado al expediente electrónico.

**Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada**  
**Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1\_1.pdf**  
**Secuencia: 2326683**

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	AZHUR TEJADA FLORES	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	TEFA691107HDFJLZ01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000000e28	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/12/2018T15:17:53Z / 06/12/2018T09:17:53-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	5e 89 35 2f a2 c3 a5 8f f5 fa 61 0c f9 fe 8f 83 13 6f c8 a6 47 fe d0 50 5b 98 c1 d1 dc 4f a4 23 e9 f6 d0 57 c8 4b 29 d7 75 64 6c a8 f8 66 96 1d d8 88 dc 4a 7f 8c 39 78 cc 80 88 05 f1 8c ce ab 58 bf 33 4b e9 a2 ca 8b 24 58 dc 80 1f cc 3e de d6 8e 49 36 6b d8 cb 2d 7a 82 85 c7 93 a1 26 fb 46 d1 35 4d cd 37 0d c2 f2 5e c2 9a e2 9f f2 53 d3 d2 eb 17 1c a6 a2 e7 d6 64 e3 5e 59 c5 f3 88 74 1e 36 f1 d3 8c e9 4e 71 60 8d fb 43 e8 fe f6 15 9a 5b b8 7e 76 5d 12 1b 54 8f 43 d3 90 a7 25 36 1b 01 20 10 ce 42 9c 5c 21 23 0d ca bf a7 d3 2a c3 e3 45 d0 91 cc b1 6d a5 b3 2e e1 67 ef ad ce 40 3e c1 88 99 72 d7 43 c4 7f 59 b3 13 c4 74 91 dd 2f 97 e8 0f 44 ac 8c 8c c9 2c 2e 18 50 98 44 d3 47 6b c0 47 f6 53 23 53 c3 62 78 8b a1 ca 12 81 37 d4 76 b9 77 b0 b9 d8 4b a0 8c 86 f9 1c			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/12/2018T15:17:10Z / 06/12/2018T09:17:10-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000000e28			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/12/2018T15:17:53Z / 06/12/2018T09:17:53-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2329591			
	Datos estampillados:	C21A460896BC35D131B7601FE53798B97CCB80D3			